

Caravanas migrantes

y desplazamientos colectivos
en la frontera México-Estados Unidos

Camilo Contreras Delgado, María Dolores París Pombo
y Laura Velasco Ortiz (*coordinadores*)



Índice

Introducción. Las caravanas y otras formas de movilidad colectiva en el nuevo contexto migratorio	9
<i>María Dolores París Pombo, Laura Velasco Ortiz y Camilo Contreras Delgado</i>	
TIJUANA	
Apartado fotográfico 1. Tijuana	39
Tijuana, Baja California, ciudad de destino de la caravana migrante 2018-2019	51
<i>Oscar F. Contreras Montellano y María Dolores París Pombo</i>	
Movilidad en familias: Estudio sociodemográfico de las caravanas migrantes en Tijuana	77
<i>Marie-Laure Coubès</i>	
Salir de las sombras: La visibilidad organizada en las caravanas de migrantes centroamericanas	103
<i>Laura Velasco Ortiz y Rafael A. Hernández López</i>	
Acciones gubernamentales y no gubernamentales de atención a la caravana	131
<i>Gabriel Humberto Pérez Duperou</i>	
PIEDRAS NEGRAS	
Apartado fotográfico 2. Piedras Negras	159

Entorno urbano de Piedras Negras, Coahuila, en el contexto fronterizo	165
<i>Gustavo Adolfo Vázquez Martínez y Camilo Contreras Delgado</i>	
La caravana de migrantes en Piedras Negras, Coahuila: Perfil sociodemográfico	181
<i>Felipe J. Uribe Salas y Luis E. Calva Sánchez</i>	
Génesis y travesía de la caravana migrante	209
<i>Isabel C. Sánchez, Jesús Rubio Campos y Andrés Sumano Rodríguez</i>	
Atención humanitaria <i>a la fuerza</i> : Gobernanza de la caravana migrante centroamericana en Piedras Negras, Coahuila	231
<i>Benjamin Bruce y Yetzi Rosales Martínez</i>	
Huir para sobrevivir. Relatos de migrantes de una caravana en Tamaulipas	265
<i>Oscar Misael Hernández-Hernández</i>	
CIUDAD JUÁREZ	
Apartado fotográfico 3. Ciudad Juárez	295
No solamente se trata de caravanas. La población migrante solicitante de asilo en Estados Unidos por Ciudad Juárez	301
<i>Jesús Javier Peña Muñoz</i>	
Proteger y contener. Estrategias de atención a población solicitante de asilo en Ciudad Juárez	325
<i>Jesús Javier Peña Muñoz</i>	
CONCLUSIONES	347
<i>Laura Velasco Ortiz, María Dolores París Pombo, y Camilo Contreras Delgado</i>	
ACERCA DE LOS AUTORES	367

Introducción. Las caravanas y otras formas de movilidad colectiva en el nuevo contexto migratorio

María Dolores París Pombo / Laura Velasco Ortiz /
Camilo Contreras Delgado

Durante 2018 y principios de 2019, se presenció un cambio importante en las formas de movilidad humana, con desplazamientos colectivos de miles de personas, que viajaban por México con intención manifiesta de llegar hasta Estados Unidos. Las caravanas migrantes centroamericanas fueron, sin duda, la forma más visible y politizada de movilidad colectiva, las cuales arribaron a la ciudad de Tijuana, en Baja California, y a Piedras Negras, en Coahuila. Simultáneamente, se desarrollaron otros movimientos de población, como la llegada masiva a Ciudad Juárez, Chihuahua, de personas originarias de Cuba y Centroamérica.

El fuerte aumento del control fronterizo y las políticas de asilo, cada vez más restrictivas, de Estados Unidos y de refugio en México, han provocado que estas formas de movilidad colectiva se tornen en una inmovilidad temporal de migrantes y solicitantes de asilo. Es decir, una vez que las personas llegan a las ciudades de la frontera norte, se encuentran bloqueadas y entran en un largo compás de espera. Algunas se asientan en el norte del país, sin perder muchas de ellas las expectativas de cruzar la frontera en algún momento.

Este libro aborda las estrategias de movilidad de las personas en desplazamiento, las acciones de los Gobiernos municipales y las organizaciones de la sociedad civil del norte de México ante el arribo, el bloqueo y la espera de estos amplios grupos de migrantes y solicitantes de asilo.

En esta introducción se bosquejan algunas líneas de análisis que atraviesan las distintas secciones y capítulos que constituyen el presente volumen. Los ejes analíticos que se han privilegiado son, por un lado, el cambio en el componente clandestino de los desplazamientos (Spener, 2009; Velasco, 2015), sobre todo de las caravanas de frente a los flujos que dominaron el siglo XX en la región, por lo que se pone el foco en su visibilidad y colectividad. En segunda instancia, se analizan los cambios en el sistema migratorio que se caracteriza ya no sólo por la migración laboral, sino también por el desplazamiento en búsqueda de asilo en Estados Unidos. Así mismo, las políticas migratorias y de asilo producen estados de espera prolongados en las ciudades fronterizas (Bélanger y Silvey, 2019; Faist, 2013). Adicionalmente, se presenta una línea más, que toca a la expresión local fronteriza del fenómeno, es decir, a los cambios en las políticas de gestión de la hospitalidad, con la presencia novedosa del Gobierno mexicano, local y federal, en sinergia con la sociedad civil y religiosa en algunas ciudades. Al final, se adjunta una breve nota sobre la metodología y estructura del libro. En las conclusiones, se describen los hallazgos de los estudios en el contexto amplio de las políticas migratorias continentales y de las movilidades humanas en el siglo XXI.

Antecedentes migratorios regionales

A lo largo de las rutas migratorias que llevan de la frontera con Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos, los medios de comunicación han dado cuenta de la movilidad masiva, colectivamente organizada, de personas que huyen de sus países por razones de inseguridad, violencia y violaciones a derechos humanos. La forma más difundida de esta movilidad colectiva es la de las denominadas caravanas, las cuales revelaban un cambio en las características de la migración en México, hasta entonces principalmente clandestina.

Tal cambio cobra sentido en el marco de una transformación mayor del régimen migratorio continental, bajo las políticas globa-

les de seguridad nacional documentadas tanto en el norte (Andreas, 2003) como en el sur del continente (Domenech, 2017), con estrategias punitivas de criminalización de las movilidades transfronterizas y el desaliento del asentamiento y arraigo de las personas extranjeras sin documentos. Mientras la migración indocumentada mexicana hacia Estados Unidos ha descendido a sus niveles más bajos desde la década de 1970 (Massey, Durand y Pren, 2015), la centroamericana se ha incrementado rápidamente a lo largo del segundo decenio del siglo XXI. A la par, las solicitudes de asilo y refugio han aumentado también aceleradamente, tanto en Estados Unidos como en México, lo que señala un cambio concomitante en la calidad y cantidad de las movilidades que se caracterizan como desplazamientos por violencia, desastres naturales y pobreza, tras búsqueda de protección internacional.

La violencia, en sus distintas expresiones, es el nuevo ingrediente estructural que se agrega a la pobreza y la desigualdad del centro y sur continental, como lo documentan Bada y Schutz (2019) para las movilidades en América Latina en el siglo XXI. En un contexto de cierre de fronteras, tales desplazamientos enfrentan estrategias de contención estatal y de desaliento en el terreno legal y judicial en el norte global. Las personas desplazadas que buscan asilo en Estados Unidos y refugio en México se encuentran en una arena de la política antimigratoria que va más allá de los mecanismos centrados en infraestructura (muros) y vigilancia del cruce y deportación. Tienen que confrontar un despliegue de protocolos y leyes que definen un nuevo contexto jurídico de exclusión, incierto para los propios abogados de defensoría migrante, que provoca estados de liminalidad legal (Menjívar, 2006) para miles de personas en espera de procesos de asilo y refugio. El énfasis judicial de la política antimigrante se ha acompañado de una renovada industria de detención, con un fuerte componente privado, en Estados Unidos, y totalmente gubernamental en México.

En este contexto regional, dominado por las políticas migratorias de Estados Unidos, el papel de los Gobiernos mexicano y

centroamericanos parece ceñirse a la historia de las relaciones de asimetría y de injerencia de Estados Unidos en las políticas nacionales respectivas y de sus propias dinámicas políticas internas.

Las migraciones forzadas desde esta región tienen antecedentes en el exilio centroamericano de la década de 1980. Durante las guerras civiles en Guatemala (1960-1996) y El Salvador (1979-1992), particularmente a raíz de la estrategia militar de tierra arrasada llevada a cabo por los Gobiernos dictatoriales de estos países con apoyo del estadounidense, centenares de miles de personas huyeron hacia México y Estados Unidos. En México, entre 1981 y 1984, cerca de 46 000 guatemaltecos, en su gran mayoría campesinos indígenas del Altiplano, fueron reconocidos como refugiados por El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) bajo la figura de *prima facie* y ubicados en campamentos al sur del país (Castillo y Venet, 2010); con el tiempo, algunos retornaron a sus comunidades, mientras muchos se integraron a los pueblos de los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Al mismo tiempo, durante esos años, decenas de miles de salvadoreños y guatemaltecos se asentaron en distintas ciudades de México y Estados Unidos, en su enorme mayoría sin documentos migratorios. A este exilio político se sumaron, durante la década siguiente, las migraciones relacionadas con desastres naturales en la región y la acogida bajo el programa de protección temporal en Estados Unidos (TPS, por sus siglas en inglés). Tal fue el caso del éxodo desde El Salvador, tras los terremotos de 2001, y desde Honduras, tras el huracán Mitch, en 1998.

Honduras merece una mención aparte, debido a que fue el origen de poco más de 80 por ciento de los integrantes de las caravanas de 2018 y 2019, que arribaron a Tijuana y Piedras Negras. Honduras, a diferencia de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, no sufrió una guerra civil y se sumó más tarde a la migración internacional hacia Estados Unidos en la década de 1990. Tal incorporación tardía, dejó fuera a un gran número de migrantes hondureños

de los programas de regularización de la década de 1980, por lo que en 2011 cerca de 70 por ciento de los migrantes nacidos en Honduras que residían en Estados Unidos no tenían un estatus legal (Reichman, 2013). La migración se ha vuelto un medio de desarrollo, al convertir las remesas en la principal fuente de divisas para el país, por lo que no es extraño el manejo político que adquirió el éxodo organizado de las caravanas en 2018, por parte de los opositores políticos al partido en turno.

Según los analistas (O'Connor, Batalova y Bolter, 2019; París, 2017), el flujo actual está asociado a la pobreza y a la violencia estructural que han llevado a altas tasas de homicidios, a actividades de bandas criminales que extorsionan de manera generalizada, así como a la corrupción institucional. Sin embargo, habrá que reconocer el papel de las redes de migrantes ya establecidos en Estados Unidos, como una vía de reproducción de la migración hondureña y el efecto de llamada que tuvo el TPS (Reichman, 2013).

La localización geográfica de México, como último territorio estatal aledaño a Estados Unidos, lo ha colocado en una situación estratégica para contener las migraciones y los nuevos tipos de desplazamientos procedentes del centro y sur del continente. Parece acertado sostener, tal como señala Rigoni (2007) desde hace más de una década, que México se ha constituido en el siglo XXI como la frontera vertical de Estados Unidos en el terreno migratorio.

Ante las barreras que ha interpuesto el Gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) para contener los flujos migratorios, muchas personas buscan refugio en México, en lugar de viajar hasta Estados Unidos sin documentos. Así, entre 2013 y 2019, se ha incrementado en más de cinco mil por ciento el número de solicitudes de la condición de refugiado en México, pasando en ese período de 1 296 a 70 302 solicitantes (Comar, 2020). Hasta 2015, la gran mayoría de los solicitantes provenían de Honduras, El Salvador y Guatemala. Sin embargo, el origen nacional se ha diversificado rápidamente, con un incremento primero de las solicitudes de venezolanos y, después, del Caribe e incluso de personas de otros

continentes. Por ejemplo, los solicitantes haitianos pasaron de 76, en 2018, a 5 538, en 2019; en cuanto a los cubanos, aumentaron de 218 a 8 277 (Comar, 2020).

Otro elemento que denota el cambio de los flujos migratorios es el crecimiento de las familias y niñas, niños y adolescentes no acompañados que intentan entrar sin documentos a Estados Unidos o se entregan en los puertos de entrada para solicitar asilo. Entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, la Patrulla Fronteriza de ese país aprehendió a más de 850 000 personas. La gran mayoría (64.5 %) formaba parte de unidades familiares —es decir, una persona adulta (generalmente mujer) con niño(s) o niña(s)— o bien eran menores no acompañados (U. S. Customs and Border Protection [CBP], 2019). La magnitud de estos desplazamientos por territorio mexicano, sea que soliciten refugio en este país o bien se desplacen para hacerlo en alguna puerta fronteriza a Estados Unidos, muestra que México es uno de los países con mayor tránsito migratorio en el mundo, junto con Marruecos y Turquía (Rodríguez, Fernández, Luna y Rodríguez, 2016).

Esta breve descripción del contexto regional puede ayudar a entender la diversidad de estrategias para desplazarse, así como el origen nacional de las personas que arribaron, entre 2018 y 2019, a las tres ciudades fronterizas donde se ubicaron los estudios aquí presentados: Tijuana, Piedras Negras y Ciudad Juárez. Las caravanas no fueron la única forma de movilidad colectiva que se pudo observar, también llegaron a Estados Unidos grupos muy numerosos de personas de origen cubano, haitiano y africano en búsqueda de asilo.

Visibilidad y colectividad de las movildades

El fenómeno de las caravanas de centroamericanos de 2018 y 2019 plantea un reto conceptual que toca la categoría de clandestinidad, con la que se ha caracterizado el gran flujo de migración sin documentos, con fines laborales, en la frontera entre México y Estados Unidos (Spener, 2009) y el éxodo centroamericano de las últimas

tres décadas (París, 2017). La teoría de frontera propone articular el concepto de clandestinidad de los cruces con el de movilidad desigual, para dar cuenta de las formas de expresión del capitalismo global y de las políticas neoliberales de control migratorio (Heyman, 2017). De tal forma, la visibilidad y colectividad de las caravanas exige una conceptualización compleja que se nutra de la sociología de los movimientos sociales (Touraine, 2006), en términos de una conducta colectiva organizada en antagonismo con las políticas de los Estados y, de alguna forma, luchando por el sentido histórico del control sobre la movilidad humana y de las propuestas deconstructivistas sobre la ilegalidad (De Génova, 2013). Las movilidades colectivas y visibles cobran un sentido político, al tratar de revertir o cuestionar los términos de esa desigualdad y reivindicar el derecho a la libre movilidad transnacional.

Según Reichman (2013), la migración de hondureños ha sido la más indocumentada, por lo que no es extraño que haya sido el principal componente de las múltiples caravanas que atravesaron algunos países centroamericanos y México. En el capítulo «Salir de las sombras: La visibilidad organizada en las caravanas de migrantes centroamericanas» se sostiene que tal visibilidad fue una protección que permitió a miles de migrantes desplazarse fuera de las sombras impuestas por la clandestinidad. Dicha visibilidad se tejió en una interacción entre los medios de comunicación, los múltiples voceros y los actores sociales y gubernamentales locales, nacionales y transnacionales.

Para los analistas de la migración mexicana, marcada por la clandestinidad del desplazamiento y de los cruces fronterizos por casi medio siglo, la visibilidad y colectividad de las caravanas centroamericanas resultó un reto analítico. Aun cuando existe registro de las caravanas como viacrucis migrantes desplazándose por territorio mexicano, las caravanas de centroamericanos en 2018 y 2019 exigen una reflexión sobre su significado para las migraciones y desplazamientos regionales, y también acerca del papel que juega México como país de tránsito y destino.

La migración en México ha cambiado drásticamente en las últimas dos décadas. Entre 2007 y 2015, la migración centroamericana creció 25 por ciento, en tanto que la mexicana sólo seis por ciento (O'Connor, Batalova y Bolter, 2019). Esa tendencia se sostiene al observar las aprehensiones y deportaciones, donde sobresalen los centroamericanos frente a los mexicanos. Un dato que habla de este efecto de balanza es que, entre 2007 y 2017, los inmigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos disminuyeron de 6.95 a 4.95 millones, mientras los centroamericanos sin documentos en ese país aumentaron de 1.5 millones a 1.9 millones (Passel y Cohn, 2019). Así mismo, en 2015, las personas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras constituían 50 por ciento del flujo indocumentado (O'Connor, Batalova y Bolter, 2019) y, en el mismo año, conformaban 80 por ciento de los solicitantes de asilo que entraron por la frontera mexicana (Cohn, Passel y Gonzalez-Barrera, 2017).

En estos desplazamientos, México y sus fronteras juegan un papel central al ser destino y territorio cruzado. Durante las últimas dos décadas, hemos visto emerger una industria de la migración con componentes de tráfico humano y de delincuencia organizada, que arroja costos humanos reflejados en muertes, desapariciones y secuestros. Los acontecimientos como los de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, cuando decenas de migrantes fueron masacrados y los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2009, 2011), que estimaban en más de 20 000 el número de migrantes secuestrados cada año en México, dejan claro cómo el territorio mexicano se ha convertido en un lugar de alta peligrosidad para los migrantes, como consecuencia de su travesía clandestina. Coutin (2003) señala con mucha claridad el nexo entre ilegalidad y clandestinidad, y el sometimiento de las personas que viven tales condiciones a estados de inexistencia de manera prolongada, lo cual las convierte en foco de abuso y violencia emocional, física y sexual, pero que procede de la violencia legal del Estado (Menjívar, 2006).

Las revisiones de otras experiencias de traslados en grupo pueden contribuir a dibujar los contornos de estas nuevas formas de desplazamientos, que tienen como característica su visibilidad y su organización colectiva. Nos referimos a otras corrientes de desplazados que han llegado a la frontera norte de México procedentes del Caribe, África y Asia y que, junto con los desplazados internos por violencia del narcotráfico, se vieron atrapados temporalmente en la frontera norte de México, obligados a anotarse en unas listas de espera, manejadas de manera informal, en las garitas internacionales y a las que, más adelante, se hace referencia.

En 2016, entraron así a México más de 17 000 personas de nacionalidad haitiana (Unidad de Política Migratoria [UPM], 2017, 2018). La gran mayoría buscaba llegar a Estados Unidos, para solicitar protección internacional. El Gobierno mexicano respondió de manera pragmática a este flujo: considerando que su destino no era México, sino Estados Unidos, y que este país tenía una figura legal, por medio de la cual recibía con relativa apertura a los migrantes haitianos, decidió dejarlos transitar por el país con un documento denominado Oficio de salida, entregado en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.

Con este documento en mano, los haitianos rentaban autobuses y viajaban en grandes grupos hasta la frontera entre Tijuana y San Diego. De acuerdo con el responsable del Desayunador Salesiano Padre Chava –un importante comedor que llegó a alojar, durante 2016 y 2017, a más de 400 personas, en un sólo día– el 15 de septiembre de 2016, llegaron cerca de 1 500 haitianos a este punto cercano a la garita de San Ysidro (CNDH y El Colegio de la Frontera Norte [El Colef], 2018). Según el INM, en agosto de 2016, al menos 15 000 migrantes habían ingresado a México por su frontera sur. De estas personas, 7 500, la mayoría haitianas, habían cruzado hacia Estados Unidos para solicitar protección, y 3 400 permanecían en el estado de Baja California: 75 por ciento en Tijuana y 25 por ciento en Mexicali (CNDH y El Colef, 2018). Esto indica que la movilidad de los haitianos fue colectiva y que

el número de personas superó, probablemente, al de los migrantes que llegaron a Baja California en las llamadas caravanas, durante el último trimestre de 2018.

Las caravanas centroamericanas que arribaron a Tijuana entre noviembre y diciembre de 2018 estaban integradas por entre 6 500 y 10 000 personas; la que llegó a Piedras Negras, Coahuila, en febrero de 2019, estaba constituida por cerca de 1 850 personas; mientras a Ciudad Juárez, entre octubre de 2018 y abril de 2019, llegaron poco más de 15 000 personas. La composición nacional diferenciada de los colectivos de personas que llegaron a cada ciudad señaló una nueva etapa en la historia de las movilidades en México y sus respectivas fronteras. Mientras en Tijuana, Baja California, y en Piedras Negras, Coahuila, dominaron las personas de origen centroamericano, principalmente de Honduras, en Ciudad Juárez, Chihuahua, procedían mayoritariamente de Venezuela y Cuba.

Las caravanas pueden caracterizarse por su visibilidad en los medios y en voces protagónicas a nivel internacional, como la del presidente estadounidense Donald Trump, que las convirtió en espectáculo; se distinguen también por su convocatoria y organización en redes digitales con distintos tipos de liderazgos, como se muestra en este libro. No obstante, lo que parece un fenómeno nuevo llevó años de gestación, anidando en las experiencias de violencia y sufrimiento en los trayectos. Estas movilizaciones colectivas fueron lentamente configurando a nuevos actores movilizados en torno a los derechos humanos de los migrantes que cruzaban por territorio mexicano.

Desde 2011, organizaciones sociales y religiosas de Centroamérica y Norteamérica realizaban movilizaciones por México, que denominaban caravanas. Por ejemplo, en época de Semana Santa, se llevaba a cabo el denominado Viacrucis Migrante. En el último trimestre de cada año, las madres y familiares de migrantes centroamericanos desaparecidos en México recorrían distintas ciudades de este país, demandando el derecho a conocer el paradero de sus hijos y a una migración segura. Las caravanas eran consideradas como una forma

de protesta contra las condiciones de violencia generalizada, que fuerzan la salida de miles de personas de sus comunidades de origen, y contra las múltiples agresiones que sufren en su camino (París, 2017; Varela y McLean, 2019).

En abril de 2018, el Viacrucis Migrante adquirió por primera vez dimensiones políticas internacionales, cuando Donald Trump alertó a través de su cuenta de Twitter sobre «las caravanas» que «vienen en camino» para llegar a Estados Unidos que «está siendo robado» por migrantes sin documentos (Semple, 2018, párrafos 4 y 5). En todos los medios de comunicación nacionales e internacionales se difundieron cotidianamente sus avances. Las abundantes noticias provocaron o acentuaron la polarización política del público mexicano y estadounidense en torno a la migración: por un lado, generaron una gran solidaridad de parte de las comunidades migrantes y defensores de derechos humanos; por el otro, suscitaron miedos y reacciones extremas de xenofobia.

En octubre de 2018, en las redes sociales, principalmente hondureñas, se empezó a convocar a una caravana que no coincidía con el Viacrucis Migrante, ni tampoco reunía específicamente a las madres de migrantes desaparecidos. Por primera vez, la caravana dejó de ser una manifestación político-religiosa, para transformarse en un medio de movilidad por México que parecía crecer como una bola de nieve. Así, durante el último trimestre de ese año, salieron al menos dos caravanas de San Pedro Sula, Honduras, y dos más de San Salvador, El Salvador (Arroyo *et al.*, 2019).

El 14 de enero de 2019, salió nuevamente de San Pedro Sula una caravana migrante con cerca de 500 personas. Como en ocasiones anteriores, esta caravana fue creciendo a lo largo de su camino (Arroyo *et al.*, 2019). Las promesas del recién iniciado Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció a los migrantes centroamericanos, tarjetas de visitantes por razones humanitarias (TVRH), permisos de trabajo y empleo en proyectos de desarrollo al sur del país, pudo ser un incentivo para el crecimiento de esta nueva caravana (Ernst y Semple, 2019). Sin embargo, es probable también

que la fuerte difusión de las caravanas en medios de comunicación y redes sociales fuera otro incentivo poderoso. De hecho, cerca de 1 500 integrantes de la caravana que entraron a México el 18 de enero decidieron seguir su camino hacia Estados Unidos, sin esperar el trámite de sus visas. Para quienes siguieron en su empeño de viajar hacia el norte, el viaje fue aún más arduo que en el caso de las caravanas precedentes.

Unas de las principales diferencias fueron la falta de acompañamiento por parte de la sociedad civil organizada y el fuerte control del movimiento de la caravana de parte de las autoridades. Las poblaciones de los pueblos del Soconusco (Chiapas) y del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) que habían recibido a las primeras caravanas con un despliegue importante de solidaridad, mostraron hacia esta nueva caravana cansancio, indiferencia e incluso rechazo (París y Montes, 2020, p. 24).

El hecho de que algunas personas se quedaran a tramitar la TVRH provocó la fragmentación de la caravana. El grupo más numeroso volvió a dividirse a partir de Querétaro, cuando la mayor parte de los integrantes decidieron tomar rumbo a la ciudad fronteriza de Piedras Negras, mientras un grupo más pequeño continuó el viaje hacia Tijuana (París y Montes, 2020).

A pesar de los múltiples intentos del Gobierno mexicano de frenar, detener y controlar las caravanas, y también de las amenazas del Gobierno de Donald Trump, en el período de 2018 a 2019, éstas se volvieron una forma de movilidad y resistencia. De acuerdo con los medios de comunicación, algunas caravanas que salieron de Honduras y de El Salvador, desde 2018, llegaron a movilizar a más de ocho mil personas al mismo tiempo (Arroyo *et al.*, 2019). Es importante señalar que aun sumando a todos los integrantes de una decena de caravanas que salieron de estos dos países desde octubre del año pasado, este medio de movilidad sigue representando a una pequeña minoría del flujo de personas que se dirigen desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

Por ejemplo, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informa que, entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, aprehendió a más de 600 000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras. De estos migrantes, más de dos terceras partes (430 540) formaban parte de unidades familiares con niños y niñas. Tan sólo en mayo de 2019, un mes en el cual ninguna caravana migrante llegó a la frontera de Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 144 000 personas, una cifra sin precedentes en los últimos 20 años (CBP, 2019).

De las migraciones al asilo y refugio: las políticas de espera

La sociología de la movilidad ha considerado la importancia del análisis de los estados de inmovilidad como intrínsecos de los desplazamientos humanos (Bélanger y Silvey, 2019; Faist, 2013). Éstos han sido observados de forma empírica como estados de espera, que pueden ser vividos como una suspensión temporal de los proyectos migratorios y acompañados de estados de ánimo diversos, generalmente de incertidumbre, ansiedad y miedo. A la luz de las deportaciones masivas desde Estados Unidos, entre 2010 y 2015, se observaron procesos de inmovilidad que fueron vistos como estados de atrapamientos pre (Núñez y Heyman, 2007) y posdeportación (Albicker y Velasco, 2016). Más recientemente, a la luz de las migraciones y desplazamientos en búsqueda de asilo, el concepto de inmovilidad se ha ampliado, para analizar los procesos de espera, cada vez más largos, a los que son sometidas miles de personas procedentes de Centroamérica (Candiz y Bélanger, 2018). La literatura muestra cómo los procesos de inmovilidad, al igual que los de movilidad humana, dependen no sólo de las estrategias de los propios migrantes, sino de las políticas migratorias.

Como se menciona con anterioridad, los flujos recibidos en la última década se caracterizan por estar constituidos por personas desplazadas por crisis económicas y políticas, en contextos de violencia estatal y criminal en Centroamérica. La huida como motor de estos desplazamientos marca las transformaciones que tratamos

de caracterizar. Ante la pinza que constituyen los controles migratorios, la infraestructura fronteriza, los procedimientos de documentación y vigilancia y la actuación del crimen organizado, la búsqueda de asilo y refugio es la modalidad dominante entre las personas desplazadas desde el sur hacia la frontera entre México y Estados Unidos. En la década de 1990, se atestigua el inicio de las políticas del desaliento de la migración indocumentada, al incrementarse los riesgos del cruce con la construcción de muros y la vigilancia férrea, y de las deportaciones masivas —para evitar el arraigo—, así como las separaciones familiares. Actualmente, el desaliento de los desplazamientos por asilo o refugio siguen nuevos rumbos. El terreno legislativo y judicial se ha vuelto una arena de la política antiinmigrante con leyes *ad hoc*, y con estrategias de desgaste, a través de esperas interminables en terceros países.

En el escenario fronterizo, esta política de espera fue inaugurada con los migrantes haitianos en 2016. Al llegar a la frontera con Estados Unidos, las autoridades migratorias aceptaron recibir solamente a un número limitado de personas cada día, de manera que muchos se quedaron durante días o semanas esperando del lado sur de la frontera. Con el empeño de evitar el hacinamiento de solicitantes de asilo en las garitas internacionales, las autoridades mexicanas establecieron listas de espera gestionadas inicialmente por los albergues, más adelante por la autoridad migratoria y, finalmente, por los propios solicitantes de asilo. Esta práctica consiste en que las personas provenientes de cualquier lugar del mundo que se presenten actualmente en algún puerto de entrada en esta frontera a solicitar asilo, deben esperar *su turno* antes de ser recibidos por las autoridades migratorias estadounidenses y pasar por una entrevista de temores fundados, para iniciar un caso de asilo en una corte de inmigración. Esta política de espera se extendió, poco a poco, a todos los puertos de entrada de esta frontera y a todas las personas solicitantes de asilo.

En 2018 y 2019, Tijuana y Mexicali, y más adelante otras ciudades de la frontera norte de México, volvieron a experimentar la

llegada masiva de solicitantes de asilo. A algunas, como Tijuana, Baja California, y Piedras Negras, Coahuila, llegaron grandes contingentes de las llamadas caravanas migrantes, en su gran mayoría originarias de Centroamérica y principalmente de Honduras. En cambio, los solicitantes de asilo que llegaron a Ciudad Juárez eran principalmente personas de origen cubano, mexicano y, en menor medida, centroamericano, como se verá en este libro.

Pasado más de un año de la llegada de estas caravanas y desplazamientos colectivos, ha sido posible documentar el curso que han tomado las políticas jurídico-legales de desaliento. En enero de 2019, se implementó el programa inicialmente conocido como Quédate en México, y renombrado Protocolos de Protección Migrante (MPP, por sus siglas en inglés). Este programa significa la devolución a México de solicitantes de asilo que se ven obligados a esperar en este país todo su proceso legal, llevado a cabo en una corte de inmigración estadounidense. Al entrar en Estados Unidos y presentarse ante las autoridades migratorias para solicitar protección internacional, se les entrega su expediente legal, así como una cita en alguna corte estadounidense. Ésta tiene lugar varios meses después del primer cruce de la frontera. El día de su cita en la corte deben presentarse en la madrugada en la garita para ser conducidos ante el juez por la autoridad migratoria estadounidense.

Lanzado inicialmente en la frontera entre Tijuana y San Ysidro, en marzo se extendió a Mexicali-Calexico y Ciudad Juárez-El Paso, y en julio se empezó a aplicar también en los cruces de Laredo-Nuevo Laredo y Matamoros-Brownsville. A lo largo del año, cerca de 60 000 personas fueron devueltas a México por este programa, de las cuales 37 por ciento eran hondureñas, 25 por ciento guatemaltecas, 13 por ciento cubanas, 13 por ciento de El Salvador y el resto de otros países de América Latina y el Caribe (TRAC Immigration, 2020).

Así mismo, los tiempos de espera como parte de los procesos de asilo pueden ser para California y Texas de 735 y 726 días respectivamente, o sea poco más de dos años (TRAC Immigration, 2020).

Para las personas que inician un proceso de asilo, la espera se cumple frecuentemente en centros de detención de Estados Unidos, o bien en albergues, viviendas precarias o campamentos en México. Se abordará más adelante el papel de los albergues como parte de las políticas de hospitalidad; ahora se pone el foco en la condición de detención.

En las últimas dos décadas, la infraestructura de detención regional por migración ha sido rebasada por las políticas de control migratorio, a través del alargamiento de las esperas en reclusión. Entre 2002 y 2007 se crearon en México siete centros de detención, sumando en total 52, con miras a su incremento, con dos en construcción y 11 en planeación (Díaz y Kuhner, 2007). En el caso de Estados Unidos, el panorama de detención es complejo, debido al modelo de sitios propios y contratados. En 2016, había 637 lugares de reclusión que incluían prisiones y cárceles, localizados en su mayoría en la frontera suroccidental, con costos de 30 dólares por cama, por 72 horas. Un año antes, 72 por ciento de los centros eran privados y 28 por ciento del Gobierno estadounidense. En total, en 2015, habían pasado por la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) un total de 699 268 personas (TRAC Immigration, 2015). Estos datos muestran la economía que existe tras las políticas migratorias, que están usando la espera en detención como estrategia de desaliento a la inmigración y solitud de asilo en Estados Unidos.

Crisis de hospitalidad para migrantes y solicitantes de asilo

Según Derrida (2010), las políticas de hospitalidad moderna están cimentadas en la filantropía antes que en el ejercicio de un derecho humano y una ciudadanía cosmopolita. Esa visión filantrópica, basada en la compasión, domina el campo de las organizaciones religiosas y de la misma política de gobierno (Peterie, 2017), pero

cada vez se registran más voces que reivindican el derecho a la hospitalidad como un derecho humano y de ciudadanía.

México posee, desde hace varias décadas, una infraestructura de hospedaje y alimentación para población en tránsito, inmigrantes o en deportación, que ya describe una geopolítica de la hospitalidad, sostenida básicamente por la sociedad civil, con una reciente participación estatal, a raíz de la presión del Gobierno estadounidense para que México contenga a la población centroamericana y a la que se han sumado organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Cruz Roja Internacional («ACNUR y el CICR se unen», 2019). Según Médicos Sin Fronteras (MSF, 2017), en 2017 existían siete rutas con 71 albergues, comedores, centros de día y organizaciones de ayuda a los inmigrantes en México, de origen social, de los cuales 60 por ciento estaban concentrados en la frontera con Estados Unidos. El mismo año, el Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano difundió un estudio sobre las casas de migrantes, donde registraba 75 organizaciones de origen católico dirigidas a atender a migrantes indocumentados en tránsito por el territorio mexicano (Conferencia del Episcopado Mexicano [CEM], 2017). En ese estudio se reconocía el posicionamiento geopolítico de México en la atracción de población migrante y el papel de las casas de migrantes católicas en la frontera norte, desde finales del siglo XX. Es decir, en la geografía de la movilidad continental todo el país surgía como una gran zona de tránsito migratorio y ayuda humanitaria.

En el siglo XX, la migración indocumentada desde México a Estados Unidos contribuyó a crear espacios de espera para cruzar la frontera, así como acciones organizadas e institucionalizadas para albergar a los viajeros, ya sea porque habían sido deportados o porque esperaban el cruce hacia el país vecino. Las políticas de hospitalidad para migrantes pobres nacionales o extranjeros han sido desarrolladas por la sociedad civil, principalmente por las órdenes religiosas scalabriniana y salesiana, para el caso de Tijuana, desde fines de la década de 1980. Sin embargo, el arribo de la inmigración

haitiana significó una crisis de atención, debido a que la demanda de albergues desbordó la capacidad de infraestructura de hospitalidad. Esto trajo consigo un despliegue de energía social y actores para generar en poco tiempo espacios, recursos y acciones para atender a la población que se apostaba en la calle.

Siguiendo la propuesta de Menjívar, Ruiz y Ness (2019) acerca de comprender las crisis migratorias con una perspectiva contextual antes que focalizada en el comportamiento de los propios migrantes, se puede pensar la crisis migratoria que vivieron las ciudades fronterizas como la incapacidad local de albergar a la población desplazada, rebasando la infraestructura creada para recibir a población migrante en un ritmo más lento, o por goteo, y el momento histórico marcado por el final de políticas de asilo y protección humanitaria para los inmigrantes haitianos y cubanos en Estados Unidos, así como la clara postura de contención migratoria del Gobierno mexicano.

En enero de 2017 se registraron 30 albergues que, según el momento de creación, se clasificaron como pioneros (5), recientes (5) y emergentes (20), y en conjunto albergaron a 2 677 personas en un período de cinco meses (CNDH y El Colef, 2018). En 2017, 80 por ciento de las personas de origen haitiano se hospedaban en los albergues emergentes, lo cual muestra la crisis de hospitalidad que enfrentó la ciudad ante un cambio en el ritmo y la condición del arribo de las personas en búsqueda de asilo. La llegada de haitianos, en 2016, marcó un parteaguas en la política de hospitalidad en Tijuana, debido a que se incrementó a más del doble el número de albergues en la ciudad, para atender lo que se calificó como emergencia humanitaria, con cerca de tres mil personas en albergues (CNDH y El Colef, 2018). Dos años después, el anuncio y arribo de las caravanas en 2018 activó la infraestructura de hospitalidad en ciudades fronterizas como Tijuana. Por primera vez, el Gobierno municipal y, posteriormente, el federal instalaron albergues para hospedar a miles de los integrantes. Un indicador del tamaño de la crisis de hospitalidad que enfrentó la ciudad es que el primer albergue gubernamental gestionado por el municipio

llegó a hospedar a seis mil personas, es decir, el doble de lo que los 30 albergues habían gestionado en 2016.

El análisis de la dinámica y los retos que enfrentó la iniciativa gubernamental en cada ciudad fronteriza de estudio, albergando y controlando la movilidad hacia Estados Unidos, ocupa varios capítulos de este libro y, como se verá, la articulación local entre los Gobiernos de los tres órdenes (municipal, estatal y federal), y la sociedad civil y religiosa, ofrece resultados distintos en la gestión local de los albergues.

Metodología de los estudios y estructura del libro

La visión presentada en el presente volumen es la que surge desde la frontera norte de México, lo cual acota los alcances empíricos y analíticos de los estudios. Las múltiples acepciones de la frontera, que proponen Wilson y Donnan (2000), caben como posibilidad en los diferentes capítulos compilados; como región, infraestructura y sistema de control, pero se entrelazan en los diferentes contextos locales fronterizos.

Este libro contiene ensayos cortos, con los resultados de tres estudios elaborados por equipos locales e interdisciplinarios de El Colef, en el arribo y estancia en albergues de estos colectivos de migrantes y solicitantes de protección en Tijuana, Baja California; Piedras Negras, Coahuila; y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dada la emergencia y velocidad de transformación de este flujo humano, los equipos interdisciplinarios de investigación en las diferentes ciudades fronterizas usaron como metodología común la encuesta con cuestionarios cortos. Las circunstancias de la población estudiada dificultaron seguir un esquema de muestreo como el aleatorio simple, ya que no todas las personas estuvieron presentes todo el tiempo en los albergues y se corría el riesgo de que algunas se marcharan al poco tiempo. Por lo anterior, se optó por realizar el levantamiento con un equipo de encuestadores y voluntarios, que

tenían como objetivo hacer el mayor número de encuestas y evitar sesgos en la selección. Para llevarlo a cabo, se les pidió seguir estrategias como estar separados, cubrir todo el espacio de los albergues y hacer recorridos sistemáticos. La unidad de muestreo fue la cama o lecho improvisado en espacios abiertos y espacios cerrados. Cabe señalar que el número de casos observados fue superior al calculado bajo un esquema de muestreo aleatorio simple.

En Tijuana, se aplicaron dos encuestas. En una primera etapa, se realizó una encuesta a una muestra no probabilística de 1 037 personas albergadas en la Unidad Deportiva Benito Juárez, en noviembre de 2018. Después, se aplicó una segunda encuesta a una muestra no probabilística de 907 personas, en diciembre de 2018: 649 personas hospedadas en el albergue El Barretal, habilitado por el Gobierno federal en un salón de eventos, y 258 en el campamento Contra Viento y Marea, en el centro de la ciudad, que albergó a personas que rehusaron ser trasladadas al nuevo albergue. En Piedras Negras, se adaptó el cuestionario aplicado en la ciudad de Tijuana, y se aplicó a una muestra no probabilística de 540 personas en el albergue gestionado por el Gobierno municipal de Piedras Negras, con apoyo del estado de Coahuila, en las dos naves que antes fueron de la empresa maquiladora Macesa, durante febrero de 2019. Y, finalmente, en Ciudad Juárez, se realizó una encuesta a una muestra no probabilística de 214 personas en cinco albergues, entre febrero y marzo de 2019; los resultados se agruparon según su origen: Cuba, Centroamérica y México.

Complementariamente, se realizaron entrevistas en profundidad a personas residentes de los albergues, voluntarios y funcionarios de Gobierno, así como observación de eventos y de interacciones para contextualizar y dar sentido a algunos hallazgos surgidos de las encuestas.

El presente volumen se compone de tres apartados, que corresponden a cada una de las tres ciudades de estudio. El primero incluye cuatro capítulos que abordan diferentes aspectos de las caravanas que arribaron entre 2018 y 2019 a la ciudad de Tijuana.

En «Tijuana, Baja California, ciudad de destino de la caravana migrante 2018-2019», Óscar F. Contreras Montellano y María Dolores París Pombo ofrecen una visión de la ciudad de Tijuana como contexto de atracción de la caravana, con una economía dinámica y una infraestructura de recepción de inmigrantes, acuñada por la historia migratoria de la ciudad. Marie-Laure Coubès analiza en «Movilidad en familias: Estudio sociodemográfico de las caravanas migrantes en Tijuana» la sociodemografía de las caravanas, con especial atención a la novedosa movilidad en familia. En «Salir de las sombras: La visibilidad organizada en las caravanas de migrantes centroamericanas», Laura Velasco Ortiz y Rafael A. Hernández López analizan el cambio en la visibilidad y organización de las caravanas, como elementos de una nueva estrategia de movilidad humana. Finalmente, «Acciones gubernamentales y no gubernamentales de atención a la caravana», de Gabriel Humberto Pérez Duperou, se enfoca en el análisis de las acciones gubernamentales y no gubernamentales de atención a los integrantes de las caravanas.

El segundo apartado incluye cinco capítulos sobre las caravanas migrantes que arribaron al noreste de México en febrero de 2019: cuatro de ellos se centran en las caravanas en Piedras Negras, Coahuila, y uno en ciudades de Tamaulipas. El capítulo «Entorno urbano de Piedras Negras, Coahuila, en el contexto fronterizo», de Gustavo Adolfo Vázquez Martínez y Camilo Contreras Delgado, presenta el entorno urbano fronterizo de Piedras Negras, al cual arribaron nuevas caravanas de migrantes con una composición nacional de origen similar a las que llegaron a Tijuana. Felipe J. Uribe Salas y Luis E. Calva Sánchez ofrecen en «La caravana de migrantes en Piedras Negras, Coahuila, México: Perfil sociodemográfico» un análisis sociodemográfico de la población que constituyó esta caravana. En «Génesis y travesía de la caravana migrante», Isabel C. Sánchez, Jesús Rubio Campos y Andrés Sumano Rodríguez sistematizan la génesis y travesía de la ruta del golfo de México de esta caravana y la coordinación institucional para su atención. El capítulo «Atención humanitaria a la fuerza:

Gobernanza de la caravana migrante centroamericana en Piedras Negras, Coahuila», de Benjamin Bruce y Yetzi Rosales Martínez, analiza los términos de la atención humanitaria que realizó el Gobierno municipal de Piedras Negras.

Finalmente, se incluye en este apartado «Huir para sobrevivir. Relatos de migrantes de una caravana en Tamaulipas», de Oscar Misael Hernández-Hernández, que presenta un acercamiento cualitativo sobre experiencias de miembros de las caravanas que llegaron a Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, después de transitar por otras ciudades fronterizas. Durante 2018 y 2019, fue posible observar en el proceso de investigación en Piedras Negras una dispersión de los integrantes de la caravana albergados en esta ciudad. El capítulo ofrece un acercamiento vivencial de los riesgos y sufrimientos de personas adultas y menores, que viajaron como parte de las caravanas y arribaron a albergues de estas dos ciudades de Tamaulipas.

La tercera sección del libro consta de dos capítulos escritos por Jesús Javier Peña Muñoz, quien coordinó la investigación sobre desplazamientos emergentes, en 2018 y 2019, en Ciudad Juárez. Éstos se alejan del patrón centroamericano de las caravanas de Tijuana y Piedras Negras y muestran desplazamientos concomitantes procedentes de Cuba, Centroamérica y México, en su mayoría, a la vez que de otras nacionalidades extracontinentales, pero que tienen características en común con las caravanas: su visibilidad y el móvil de búsqueda de protección internacional. «No solamente se trata de caravanas. La población migrante solicitante de asilo en Estados Unidos por Ciudad Juárez» contiene una descripción y un análisis de las principales características sociodemográficas de la población que arribó en el marco de estas movilidades. En tanto, «Proteger y contener. Estrategias de atención a población solicitante de asilo en Ciudad Juárez» ofrece un análisis de la respuesta contradictoria de proteger y contener por parte del Gobierno y la sociedad civil, y que podría ser un elemento consistente de la reacción gubernamental en las otras ciudades fronterizas que se abordan en este volumen.

Referencias

- ACNUR y el CICR se unen para construir un albergue para migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México. (19 de febrero de 2019). *Europa Press*. Recuperado de https://www.europapress.es/internacional/noticia-acnur-cicr-unen-construir-albergue-migrantes-refugiados-solicitantes-asilo-mexico-20190219075233.html?fbclid=IwAR33YPS7Ih1mcG7Grb-1v9rxprJkaHnbgG0ZzuyD3o-QfPOa_K66K51v3ZY
- Albicker, S. y Velasco, L. (2016). Deportación y estigma en la frontera México-Estados Unidos: atrapados en Tijuana. *Norteamérica*, 11(1), 99-129.
- Andreas, P. (Mayo de 2003). *A Tale of Two Borders: The U.S.-Mexico and U.S.-Canada Lines After 9-11* [Working Paper 77]. San Diego, Estados Unidos: The Center for Comparative Immigration Studies-University of California San Diego.
- Arroyo, E., Cano, B., París, D., Ruíz, R., Palacios A. y Mariscal, J. (2019). *Cronología. Caravana Centroamericana 2018. 5 de octubre de 2018 al 30 de enero de 2019* [infográfico]. Recuperado de <https://observatoriocolef.org/infograficos/cronologia-de-la-caravana-centroamericana>
- Bada, X. y Schutz S. (2019). Movilidades en América Latina en el siglo XXI. *Sociedad y Economía*, 34, 9-10.
- Bélanger, D. y Silvey, R. (19 de abril de 2019). An Im/mobility Turn: Power Geometries of Care and Migration. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46(16), 3423-3440. Recuperado de <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1592396>
- Candiz, G. y Bélanger, D. (2018). Del tránsito a la espera: el rol de las casas del migrante en México en las trayectorias de los migrantes centroamericanos. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 43(2), 277-297.
- Castillo, M. A. y Venet, F. (2010). El asilo y los refugiados: una visión histórica y crítica hasta nuestros días. En F. Alba, M. Á. Castillo y G. Verduzco (coord.), *Los grandes problemas de Mé-*

- xico. Vol. III Migraciones internacionales* (pp. 195-226). Ciudad de México: El Colegio de México.
- Cohn, D., Passel, J. F. y Gonzalez-Barrera, A. (7 de diciembre de 2017). Rise in U.S. Immigrants from El Salvador, Guatemala and Honduras Outpaces Growth from Elsewhere [reporte]. *Pew Research Center*. Recuperado de https://www.pewresearch.org/panic/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/Pew-Research-Center_Central_American-migration-to-U.S._12.7.17.pdf
- Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). (2020). *Estadística Comar* [hoja de datos]. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/522537/CIERRE_DICIEMBRE_2019__07-ene_.pdf
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (15 de junio de 2009). *Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes*. México: Autor. Recuperado de https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/2009_migra.pdf
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (22 de febrero de 2011). *Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México*. México: Autor. Recuperado de https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2011_secmmigrantes.pdf
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y El Colegio de la Frontera Norte (El Colef). (Mayo de 2018). *Informe especial. Migrantes haitianos y centroamericanos en Tijuana, Baja California, 2016-2017. Políticas gubernamentales y acciones de la sociedad civil*. Recuperado de <https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Informe-Migrantes-2016-2017.pdf>
- Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). (21 de marzo de 2017). *Estudio sobre las casas de migrantes católicas* [sitio web]. Recuperado de <http://www.cem.org.mx/Slider/58-ESTUDIO-SOBRE-LAS-CASAS-DE-MIGRANTES-CAT%C3%93LICAS.html>

- Coutin, S. (2003). Illegality, Borderlands, and the Space of Nonexistence. En R. Warren y B. Maurer (edit.), *Globalization Under Construction: Governmentality, Law, and Identity* (pp. 171-202). Minneapolis, Estados Unidos: University of Minnesota Press.
- De Genova, N. (2013). Spectacles of Migrant 'Illegality': The Scene of Exclusion, the Obscene of Inclusion. *Ethnic and Racial Studies*, 36(7), 1180-1198.
- Derrida, J. (2010). Hospitality. Angelaki. *Journal of Theoretical Humanities*, 5(3), 3-18. Recuperado de <https://doi.org/10.1080/09697250020034706>
- Díaz, G. y Kuhner, G. (1 de octubre de 2007). Mujeres migrantes en tránsito y detenidas en México. *The Online Journal of the Migration Policy Institute*. Recuperado de <https://www.migrationpolicy.org/article/mujeres-migrantes-en-tr%C3%A1nsito-y-detenidas-en-m%C3%A9xico>
- Domenech, E. (2017). Las políticas de migración en Sudamérica: elementos para el análisis crítico del control migratorio y fronterizo. *Terceiro Milênio: Revista Crítica de Sociologia e Política*, 8(1), 19-48.
- Ernst, J. y Semple, K. (25 de enero de 2019). Las visas humanitarias en México: un imán para la nueva caravana migrante. *The New York Times*. Recuperado de <https://www.nytimes.com/es/2019/01/25/mexico-migrantes-plan-atencion>
- Faist, T. (2013). The Mobility Turn: A New Paradigm for the Social Sciences? *Ethnic and Racial Studies*, 36(11), 1637-1646. Recuperado de <https://doi.org/10.1080/01419870.2013.812229>
- Heyman, J. (2017). Contributions of US-Mexico Border Studies to Social Science Theory. En C. Vélez-Ibáñez y J. Heyman (edit.), *The US-Mexico Transborder Region: Cultural Dynamics and Historical Interactions* (pp. 44-64). Tucson, Estados Unidos: University of Arizona Press.
- Massey, D. S., Durand, J. y Pren, K. A. (2015). Border Enforcement and Return Migration by Documented and Undocumented Mexicans. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 41(7), 1015-1040.

- Médicos Sin Fronteras (MSF). (Mayo de 2017). *Forzados a huir del Triángulo Norte de Centroamérica: Una crisis humanitaria olvidada* [informe]. Recuperado de https://www.msf.mx/sites/mexico/files/attachments/msf_forzados-a-huir-del-triangu-lo-norte-de-centroamerica_0.pdf
- Menjívar, C. (2006). Liminal Legality: Salvadoran and Guatemalan Immigrants' Lives in the United States. *American Journal of Sociology*, 111(4), 999-1037.
- Menjívar, C., Ruiz, M. y Ness, I. (2019). Migration Crises: Definitions, Critiques, and Global Contexts. En C. Menjívar, M. Ruiz e I. Ness (edit.), *The Oxford Handbook of Migration Crises* (pp. 1-20). Inglaterra: Oxford University Press.
- Núñez, G. y Heyman, J. (2007). Entrapment Processes and Immigrant Communities in a Time of Heightened Border Vigilance. *Human Organization*, 66(4), 354-365.
- O'Connor, A., Batalova, J. y Bolter J. (15 de agosto de 2019). Inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos. *The Online Journal of The Migration Policy Institute*. Recuperado de <https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-centroamericanos-en-los-estados-unidos>
- París, M. D. (2017). *Violencias y migraciones centroamericanas en México*. Tijuana, México: El Colef.
- París, M. D. y Montes, V. (Enero-junio de 2020). Visibilidad como estrategia de movilidad: El éxodo centroamericano en México (2018-2019). *EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 7(1), 9-37. Recuperado de <https://doi.org/10.31644/ED.V7.N1.2020.A01>
- Passel, J. S. y Cohn, D. (12 de junio de 2019). Mexican decline to less than half the U.S. unauthorized immigrant population for the first time [sitio web]. *Pew Research Center*. Recuperado de <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/12/us-unauthorized-immigrant-population-2017>
- Peterie, M. (2017). Docility and Desert: Government Discourses of Compassion in Australia's Asylum Seeker Debate. *Jour-*

- nal of Sociology*, 53(2), 351-366. Recuperado de <https://doi.org/10.1177/1440783317690926>
- Reichman, D. (16 de abril de 2013). Honduras: The Perils of Remittance Dependence and Clandestine Migration. *The Online Journal of The Migration Policy Institute*. Recuperado de <https://www.migrationpolicy.org/article/honduras-perils-remittance-dependence-and-clandestine-migration>
- Rigoni, F. M. (2007). La última frontera del crimen: El secuestro del migrante indocumentado. *Migrantes. Revista de Información y Pastoral Migratoria*, 13(3), 3.
- Rodríguez, E., Fernández, C., Luna, R. y Rodríguez, E. (2016). *Bibliografía sobre migración en tránsito irregular*. Ciudad de México: Instituto Tecnológico Autónomo de México.
- Semple, K. (3 de abril 2018). Los tuits de Trump convierten al Viacrucis Migrante en un asunto internacional. *The New York Times*. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/es/2018/04/03/espanol/trump-caravana-migrante.html>
- Spener, D. (2009). *Clandestine Crossings: Migrants and Coyotes on The Texas-Mexico Border*. Nueva York: Cornell University Press.
- Touraine, A. (2006). *Los movimientos sociales*. *Revista Colombiana de Sociología*, 27, 255-278.
- TRAC Immigration. (2015). *New Data on 637 Detention Facilities Used by ICE in FY 2015* [reporte]. Recuperado de <https://trac.syr.edu/immigration/reports/422>
- TRAC Immigration. (2020). *Details on MPP (Remain in Mexico) Deportation Proceedings by Hearing Location and Attendance, Representation, Nationality, Month and Year of NTA, Outcome, and Current Status* [base de datos]. Recuperado de <https://trac.syr.edu/phptools/immigration/mpp>
- Unidad de Política Migratoria (UPM). (2017). *Boletín Anual de Estadística Migratoria 2016*. Recuperado de <http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CuadrosBOLETIN?Anual=2016>
- Unidad de Política Migratoria (UPM). (2018). *Boletín Anual de Estadística Migratoria 2017*. Recuperado de <http://www.poli>

ticamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CuadrosBOLETIN?Anual=2017

- U. S. Customs and Border Protection (CBP). (2019). *U. S. Border Patrol Southwest Border Apprehensions by Sector Fiscal Year 2019* [datos estadísticos]. Recuperado de <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration/usbp-sw-border-apprehensions-fy2019>
- Varela A. y McLean, L. (2019). Caravanas de migrantes en Mexico: nueva forma de autodefensa y transmigración. *Revista CIDOB d'Àfers Internacionals*, 122, 163-185.
- Velasco, L. (2015). Cross-border Mobility and Clandestine Practices: Scenarios of Violence in the Mexico-United States Border Region. *Human Organization*, 75(3), 269-278.
- Wilson, T. M. y Donnan, H. (2000). *Border Identities. Nation and State at International Frontiers*. Inglaterra: Cambridge University Press.

Conclusiones

Laura Velasco Ortiz / María Dolores París Pombo /
Camilo Contreras Delgado

La historia de la frontera entre México y Estados Unidos, como región heterogénea, no puede ser comprendida sin las movilizaciones humanas que la han constituido desde su fundación en 1846. La condición de adyacencia y asimetría económica y política entre ambos países ha sido un factor de atracción de personas que buscan una mejor vida o bien que huyen en búsqueda de asilo. Las caravanas migrantes y los desplazamientos colectivos que se analizan en este libro señalan la emergencia de formas de movilidad novedosas en su organización, composición sociodemográfica y orígenes geográficos. Tales novedades exigen una mirada más allá del binomio México-Estados Unidos, dado que dichos desplazamientos desbordan ambos países e involucran también a centroamericanos, caribeños, sudamericanos y migrantes de otros continentes. La crisis social y humanitaria actual está asociada no sólo a la pobreza y desigualdad, sino también a la violencia militar, política y social que ha azotado a los países americanos durante los siglos XX y XXI.

A lo largo de los capítulos que componen este volumen, se han descrito y analizado distintos patrones de movilizaciones humanas transfronterizas y las reacciones institucionales y de la sociedad civil organizada. En Tijuana y en Piedras Negras se han documentado las movilizaciones en caravanas surgidas de Centroamérica, principalmente de Honduras. En tanto, en Ciudad Juárez, se presentan

los resultados del estudio de las movilidades procedentes de Cuba, Centroamérica y el interior de México.

La virtud de constituir colectivos de investigación para dar cuenta de tal heterogeneidad ha dado resultados suficientes para hablar de novedades empíricas que se analizan a la luz del conocimiento acumulado sobre las movilidades en la región fronteriza y en el continente americano. A continuación, se señalan algunas de esas novedades a partir de líneas de análisis que indican exigencias de conceptualización y propuestas de intervención. Se muestra, en primer lugar, una visión en conjunto del contexto regional centro y norte de América, que configura el fenómeno de las caravanas de 2018 y 2019. En segundo lugar, los cambios recientes en las movilidades transfronterizas y las tendencias que pueden significar a corto y mediano plazo. Se describen después las estrategias de desplazamiento y la organización de estas movilidades. En un cuarto apartado de estas conclusiones, se reflexiona sobre las similitudes y diferencias en la composición sociodemográfica de las personas que llegaron a las ciudades de la frontera norte, particularmente a Tijuana, Ciudad Juárez y Piedras Negras. Finalmente, se analizan las respuestas de las instituciones públicas y de la sociedad civil tanto en materia de atención humanitaria como en las acciones para la inserción a corto plazo de las personas en movilidad.

Más allá del binomio México-Estados Unidos

En los últimos 10 años, ha habido un cambio vertiginoso en la política migratoria en las regiones del centro y norte de América que se expresa en los acontecimientos migratorios de 2018 y 2019. De acuerdo con cifras oficiales de Estados Unidos, más de 72 por ciento de las personas migrantes arrestadas en la frontera suroeste de ese país, en agosto de 2019, son de El Salvador, Honduras y Guatemala (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., 2019). Si bien la creciente presencia de migrantes centroamericanos

en tránsito por México, así como su ingreso a Estados Unidos es más notoria desde el inicio de la segunda década de este siglo, no cabe duda de que las caravanas finalmente detonaron una serie de estrategias y medidas en países de origen, tránsito y destino.

En el caso de México se vio cómo la política migratoria de la actual administración federal dio un giro cuando el Gobierno de Estados Unidos amenazó con el incremento de aranceles a los bienes producidos en el país si no se establecía una política migratoria de contención en la frontera sur mexicana. Como respuesta a esta presión, se envió a la Guardia Nacional a la frontera sur y norte desde mediados de 2019 (Selee, 2020). Lo que quedó de la erosionada política migratoria humanitaria de parte de México fue el financiamiento del programa Sembrando Vida, en El Salvador, diseñado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con la intención de generar cientos de empleos e incidir en algunas de las causas de la migración (Nájar, 2019).

Los casos de El Salvador, Guatemala y Honduras son similares al de México: estos países firmaron acuerdos con Estados Unidos bajo la amenaza de imposiciones arancelarias. La firma del Acuerdo de Cooperación de Asilo de Estados Unidos con Guatemala (julio de 2019); El Salvador y Honduras (con ambos en septiembre de 2019) (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., 2019) convirtió a estas tres naciones en *países seguros*, lo que los obliga a retener en sus territorios a aquellas personas que soliciten asilo a Estados Unidos, incluso a solicitantes de asilo rechazados de Estados Unidos para que realicen en estos terceros países su solicitud de refugio. Este acuerdo ha generado controversia en los tres países centroamericanos, tanto por la posible violación de derechos humanos como por la incapacidad gubernamental para atender a estos migrantes en aspectos como alimentación, salud, educación y seguridad (Bermúdez, 2019). En paralelo con el acuerdo mencionado, también han sido firmados otros instrumentos entre estos países y Estados Unidos, tales como convenios de seguridad fronteriza y del programa para

intercambiar información biométrica, así como acuerdos para programas de trabajadores temporales en actividades agrícolas y no agrícolas (Departamento de Seguridad Nacional de EU. UU., 2019).

Cambios en las movilidades fronterizas: La búsqueda de asilo

Se entiende por movilidades fronterizas no sólo aquellas realizadas por personas que cruzan una frontera, sino también las de aquellas que llegan a las ciudades fronterizas con la finalidad de encontrar trabajo o en espera de cruzar la frontera para resolver sus procesos de asilo. Las movilidades observadas en 2018 y 2019 podrían llevar a una apreciación apresurada sobre su naturaleza coyuntural, pero si se observan los desplazamientos forzados a nivel mundial puede desecharse tal hipótesis para explorar la posibilidad de que realmente estamos frente a un nuevo fenómeno que se establecerá por varias décadas, en tanto las condiciones de violencia y pobreza no disminuyan en las principales regiones de origen. Las múltiples barreras a la movilidad y las políticas de contención migratoria pueden frenar coyunturalmente los flujos, pero a mediano plazo las personas continuarán buscando vías para llegar hacia territorios donde puedan obtener protección humanitaria.

Desde 2014, las estadísticas oficiales de detenciones de migrantes por autoridades mexicanas y estadounidenses muestran un crecimiento continuo de los flujos provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, además de la presencia cada vez más numerosa de familias, niñas, niños y adolescentes no acompañados. Un factor importante del crecimiento de la movilidad de sur a norte es la búsqueda de asilo en Estados Unidos. Mientras que, en el año fiscal 2019, 233 779 personas solicitaron asilo en ese país, el año anterior fueron 220 546 las solicitudes. El aumento fue particularmente elevado en el caso del asilo defensivo, es decir, personas que lo piden para evitar la deportación, ya sea presentándose en la garita (después de haber esperado su turno en las listas de espera) o cruzando de manera indocumentada. Estos casos aumentaron

de 115 074, en 2018, a 149 779, en 2019 (U. S. Department of Justice, 2020).

Sólo una pequeña fracción de esta población se movilizó en México a través de las llamadas caravanas migrantes o mediante otra forma colectiva de movilidad. Sin embargo, ésta fue la cara más visible de la migración en México durante este período, por lo que es necesario considerar en su análisis la dimensión política. *La Cronología de las caravanas migrantes*, elaborada por el Observatorio de Legislación y Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) (Arroyo *et al.*, 2019) permite detectar que durante el último trimestre de 2018 salieron cuatro caravanas, las dos primeras desde San Pedro Sula (Honduras) y las dos restantes desde San Salvador (El Salvador). Los integrantes de una de esas caravanas fueron detenidos en la frontera sur de México y deportados de inmediato a sus países de origen. Las otras tres se dirigieron a Tijuana. En enero de 2019, salió la quinta caravana, nuevamente de San Pedro Sula. Esta caravana pasó también por Ciudad de México, pero ahí se dividió en dos: la mayor parte se dirigió a Piedras Negras, mientras que algunos integrantes fueron también a Tijuana.

El hecho de que cerca de tres cuartas partes de las personas encuestadas en Tijuana y en Piedras Negras fueran de nacionalidad hondureña muestra también que el fenómeno de las caravanas fue centroamericano y principalmente hondureño. Es importante, sin embargo, entender que muchas personas se unieron en la ruta que lleva hacia el norte; así, las personas migrantes que se integraron a las caravanas provenían también de otros países de Centroamérica y, en menor medida, de México.

Los estudios presentados en este libro reflejan el escenario arriba descrito. En el caso de las caravanas migrantes que llegaron a Tijuana (noviembre 2018), como explica Marie-Laure Coubès en el capítulo titulado «Movilidad en familias. Estudio sociodemográfico de las caravanas migrantes en Tijuana», la mayoría de la población llegaba con la intención de pedir asilo en Estados Unidos o pretendía cruzar sin documentos a ese país; la propensión a pedir asilo era más alta entre

quienes viajaban con niñas y niños (quienes representaban 18 % de la población encuestada, pero 40 % en el caso de las mujeres).

En el caso de la caravana que llegó a Piedras Negras (Coahuila), Felipe J. Uribe Salas y Luis E. Calva Sánchez muestran también que los principales factores de expulsión de las personas fueron pandillas y maras, inseguridad, robos y violencia generalizada; en la mayoría de los casos (61 %) estos factores se combinaban con la falta de empleo o bajos salarios.

En los estudios llevados a cabo en las tres ciudades (Tijuana, Ciudad Juárez y Piedras Negras) aparecen recurrentemente los factores de la violencia social y la inseguridad, además de motivaciones ya mencionadas, como falta de empleo o bajos salarios. El aspecto de la violencia cotidiana, para el caso de las personas que salieron de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, es un factor de la movilidad humana en la región ya analizado en otros estudios (Coutin, 2011; París, 2017).

Las formas de movilidad de las personas encuestadas en Ciudad Juárez (ver «No solamente se trata de caravanas. La población migrante solicitante de asilo en Estados Unidos por Ciudad Juárez») fueron muy diferentes de las que se registraron en las otras dos ciudades: sólo 2.4 por ciento habían viajado en caravanas y se trataba únicamente de personas centroamericanas. En cambio, la mayoría de la población había llegado en autobuses (59.4 %) y una proporción muy alta en avión (34.4 %). Los lugares de origen también distaban de los registrados en Tijuana y Piedras Negras, se trataba de cubanos (54.9 %) y en segundo lugar de mexicanos (15.5 %) originarios principalmente de los estados de Chiapas y Guerrero. Les seguían hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses y, en menor medida, salvadoreños y venezolanos. La población en movilidad entrevistada en Ciudad Juárez era en su mayoría solicitante de asilo en Estados Unidos, por lo que una tercera parte de los encuestados dijeron haber salido por presiones políticas y una tercera parte debido a la inseguridad; mientras que sólo 8.3 por ciento señaló la falta de empleo.

En conclusión, el asilo en Estados Unidos se volvió un motor importante de las movilidades y la razón de los fenómenos de espera prolongada registrados en esta frontera mexicana.

La composición sociodemográfica: el desplazamiento familiar

Tal como es presentado en el libro, los estudios encontraron cambios en la composición demográfica de las movilidades fronterizas, que ya habían sido registrados en las estadísticas oficiales de la última década. El primer cambio es el origen nacional de las personas desplazadas que arribaron a la frontera durante el período estudiado. En 2016, la migración de origen haitiana marcó un cambio sustancial en el dominio de la migración mexicana en esta frontera, ya sea como deportados, desplazados o como migrantes laborales en tránsito a Estados Unidos. Los desplazamientos de 2018 y 2019 mostraron un patrón centroamericano común en el origen nacional en Tijuana y Piedras Negras, principalmente hondureños (74 % y 78.5 %), salvadoreños (17 % y 12.7 %), guatemaltecos (7 % y 6 %) y de otras nacionalidades (2 % y 2.8 %). A diferencia, en Ciudad Juárez, que posee un perfil urbano y de movilidad más cercano a Tijuana, se recibió un flujo distinto en términos de orígenes nacionales: 54 por ciento de origen cubano, 15.5 mexicanos, 9.9 hondureños, 7 guatemaltecos, 4.7 nicaragüenses, 1.9 salvadoreños y el resto, 7.1 por ciento, de distintos orígenes nacionales, incluyendo África.

Como se señala en el apartado anterior, los cambios registrados en Tijuana y Piedras Negras eran parte de las transformaciones registradas en los flujos continentales en el interior de Estados Unidos. No obstante, la diversidad nacional encontrada en Ciudad Juárez, con su significativo componente cubano, puede señalar que una vez abierta la modalidad de caravanas, otros grupos o colectivos de migrantes iniciaron la travesía migratoria para solicitar también asilo a Estados Unidos desde la frontera mexicana. Esta idea coincide con lo que plantean Sánchez, Rubio y Sumano en

«Génesis y travesía de la caravana migrante», como el efecto de llamada que tuvo sobre otros migrantes las políticas de visas humanitarias del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2019.

Otro cambio importante es la mayor presencia de familias y, por lo tanto, de mujeres, niñas y niños en los flujos migratorios que arribaron a la frontera con destino a Estados Unidos. En Tijuana y Piedras Negras las proporciones de mujeres son similares (25.7 % y 27.8 %, respectivamente), en tanto que, en Ciudad Juárez, las mujeres constituyen 46.3 por ciento. Estos datos contrastan con los registrados para la migración mexicana, a través de las estadísticas de devoluciones desde Estados Unidos, las cuales señalan 11 por ciento de mujeres en 2017 (El Colef *et al.*, 2019).

El incremento de la presencia de mujeres puede estar relacionado con la migración en familia. Tal como los datos oficiales lo señalan (U. S. Customs and Border Protection [CBP], 2019), entre los detenidos por autoridades estadounidenses en el año fiscal 2019, la gran mayoría (64.5 %) formaba parte de unidades familiares —es decir, una persona adulta (generalmente mujer) con niño(s) o niña(s)— o bien eran menores no acompañados. La misma tendencia se registró para los detenidos por autoridades mexicanas, el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó 186 750 detenciones de migrantes, lo que representó un aumento de 42 por ciento sobre el último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2018). De estas personas detenidas, 28 por ciento eran niñas, niños y adolescentes, y 30 por ciento estaba constituido por mujeres. Es decir, la mayoría (58 %) de las personas migrantes detenidas eran mujeres, niñas, niños y adolescentes. Marie-Laure Coubès, en «Movilidad en familias: Estudio sociodemográfico de las caravanas migrantes en Tijuana», documenta un incremento de 56 por ciento, entre 2014 y 2018, en la movilidad de personas en familias entre los detenidos por la Patrulla Fronteriza después de cruzar la frontera mexicana. Según esta autora, lo que registra el estudio en Tijuana y Ciudad Juárez no es un fenómeno nuevo, sino que más bien las caravanas y desplazamientos colectivos visibilizaron este

comportamiento. Según los hallazgos, en Tijuana la movilidad en familia se asocia con el curso de vida, el género y la nacionalidad de los migrantes, y no con el nivel educativo. Las personas viajando en familia tenían mayor propensión a cruzar la frontera, y en esto parece decisiva la conexión con familiares en Estados Unidos. En el apartado anterior, se adelantó la relación documentada entre migración familiar y búsqueda de asilo en Tijuana y Piedras Negras, es decir, los grupos familiares contaban con un proyecto de búsqueda de protección internacional más definida que las personas viajando solas.

Es posible plantear tres conclusiones: 1) que la migración familiar implica un abandono del proyecto de vida en sus lugares de origen, asociado al momento de ciclo de vida (niños pequeños), además de la pobreza e inseguridad; 2) que la violencia está alcanzando niveles y formas que no deja a salvo a los niños y niñas y, en conexión, que no es un problema individual, sino que expone a todo el núcleo; y 3) que en esas condiciones la búsqueda de asilo es el último recurso para salvar al núcleo familiar.

Una incipiente organización en las caravanas

Los antecedentes e indicios organizativos que se pudieron identificar en las caravanas estudiadas no son suficientes para comprender movilizaciones de tales magnitudes o, dicho en otras palabras, proyectos tan complejos en sus circunstancias, contextos y extensión de los desplazamientos. Sin embargo, como muestran Velasco y Hernández en el capítulo «Salir de las sombras: La visibilidad organizada en las caravanas de migrantes centroamericanas», distintos tipos de liderazgo dieron forma a las caravanas desde su punto de origen hasta su llegada a la frontera norte de México. Los autores distinguen liderazgos transnacionales, que tuvieron funciones importantes a nivel del financiamiento y, sobre todo, de visibilidad en los medios de comunicación. Describen también los liderazgos

nacionales, visibles particularmente en el punto de salida, pero con incidencia en la negociación política, tanto en Honduras como en México. Finalmente, señalan la tendencia al surgimiento de líderes locales que fueron ganando influencia a lo largo del camino y tuvieron un papel importante para definir estrategias de movilidad y las rutas hacia el norte.

Tal como está documentado, los motivos por los que las personas se integraron a la caravana son diversos, pero domina la oportunidad que encontraron en el llamado por diferentes medios de comunicación y la expectativa de lograr llegar a Estados Unidos. Detrás de ese sentido de oportunidad, están las fuerzas precisas de la huida: violencia y pobreza. Esta postura schutziana nos acerca a la importancia de conocer los contextos, antecedentes y aspiraciones que pueden aportar al entendimiento de por qué la gente decidió organizarse para moverse en caravanas. En tal sentido, las frases en las convocatorias para las caravanas que partieron de San Pedro Sula, Honduras, tales como «Buscamos refugio, en Honduras nos matan» o «No nos vamos porque queremos. Nos expulsa la violencia y la pobreza» no sólo son eslóganes o frases efectivas por sí mismas, sino que acusan un estado de cosas que lleva a la acción consciente y reflexiva y que, además, trasciende las fronteras de Honduras donde fueron emitidas. Es un primer nivel de identificación entre personas que han experimentado diversas formas de inseguridad y precariedad en países como Honduras, El Salvador y Guatemala. En este sustrato común también están los riesgos y violaciones experimentadas durante su tránsito por América Central y México. Estos motivos son indicios para entender la respuesta multitudinaria al llamado de marchar en caravana. Sin embargo, dicha constelación de problemas humanitarios ni es reciente, ni es privativa para la movilidad en grandes grupos.

Los llamados viacrucis migrantes son antecedentes directos de la estrategia de movilización multitudinaria: la visibilización de los riesgos y los diferentes tipos de violación de los derechos humanos de los migrantes. Estas experiencias previas, así como la aparición de

los liderazgos arriba mencionados, explican la capacidad de movilización de miles de personas en su viaje por México. Los arrestos policíacos de algunos líderes, tanto del lado de Centroamérica como de México, no terminaron con las caravanas.

Mantenerse unidos les dio visibilidad, algo en lo que los medios de comunicación y las redes sociales fueron fundamentales. La unidad y la visibilidad fue la gran diferencia con respecto a la migración fragmentada y conducida por *coyotes*. Mantenerse unidos dio confianza para moverse en familia o mujeres sin compañero viajando con menores, evitar extorsiones del crimen organizado y autoridades mexicanas, evitar la detención en las estaciones migratorias y abaratar costos al eludir los servicios del coyotaje. Una conclusión importante es que esa unidad física en el desplazamiento no eliminó la diferenciación social interna en la caravana. Como documentan Velasco y Hernández en su capítulo, una línea de exclusión fue la identidad sexual de los integrantes de la caravana. Las personas de la comunidad LGBTTTTI se constituyeron como contingente separado con albergues y procedimientos distintos para la solicitud de protección internacional, una vez en la frontera mexicana. En tanto, en Ciudad Juárez, la diferenciación entre personas solas y familias filtró su acceso a los albergues, algo que aborda Peña en «Proteger y contener. Estrategias de atención a población solicitante de asilo en Ciudad Juárez».

La visibilidad y movilidad en grandes contingentes también trajo consecuencias no esperadas y hasta paradójicas para los migrantes. Al menos en el caso de la caravana que tuvo como destino la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, motivó a que gobernantes estatales y municipales *facilitaran* el traslado, pero más que una acción humanitaria fue una forma de sacarlos de sus municipios y estados. Se reitera que esto no fue el resultado de la gestión organizada de los caravaneros, sino un efecto del tamaño del grupo y su visibilidad mediática.

La respuesta de los Gobiernos locales, como veremos en el próximo apartado, fue distinta en cada ciudad. En Tijuana, las

autoridades municipales y federales trataron de mantener unido al contingente en grandes albergues con libertad de entrada y salida, lo que llevó a su paulatina desocupación. Los grupos de decenas de personas que permanecieron en el albergue fueron trasladados por agentes del INM a los albergues de la ciudad. En tanto en Piedras Negras, el Gobierno del estado de Coahuila recurrió también a la concentración en un gran albergue, pero con control total y sin libertad de salida; ante las primeras revueltas trasladaron a sus ocupantes a diferentes partes del país. Para este caso, la fragmentación y el regreso a la invisibilidad fue la contraestrategia seguida por las autoridades mexicanas. No fue necesario desarticular ninguna estructura organizacional, sino que fue más efectivo dividir y regresar a las sombras al grupo centroamericano que innovó las formas de confrontar las violaciones a los derechos de los migrantes.

Reacciones del Gobierno y la sociedad civil-religiosa

Respuestas de los Gobiernos

Durante el último trimestre de 2018, la emergencia de las caravanas migrantes centroamericanas coincidió con un cambio de gobierno a nivel federal, lo cual dificultó la coordinación entre las distintas ciudades y entidades federativas por las que transitaban o a donde llegaron los migrantes. Claramente, el Gobierno federal saliente de Enrique Peña Nieto hizo lo posible por deslindarse del fenómeno y no tomó ninguna medida de planeación. Sus acciones se limitaron a tratar de impedir la entrada de las personas migrantes en la frontera sur, a través de acciones de contención como el uso de la Policía Federal para resguardar la frontera con Guatemala y el lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar a las personas migrantes. Esas acciones tuvieron resultados desastrosos en materia de derechos humanos, considerando el número muy elevado de niñas, niños y personas en condiciones de gran vulnerabilidad que integraban las caravanas.

El Gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que llegó al poder en México en diciembre 2018, modificó radicalmente la política hacia las caravanas. Su estrategia consistió inicialmente en documentar con Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH) a las personas que integraban las caravanas, frenarlas a través de diversas propuestas de inserción laboral en el sur del país, evitar que entraran a los pueblos y ciudades por donde transitaban y proveer los recursos mínimos a las personas migrantes para evitar una crisis humanitaria. De tal manera, los estudios llevados a cabo en Tijuana y Piedras Negras muestran el esfuerzo del INM para regularizar de manera rápida y eficaz a las personas integrantes de las caravanas a través de la TVRH. En el capítulo titulado «Génesis y travesía de la caravana migrante» incluido en la sección sobre Piedras Negras, Sánchez, Rubio y Sumano señalan que este programa de regularización pudo tener un efecto llamada para muchas personas y podría también haber incidido en que migrantes centroamericanos consideraran a México como una segunda opción para establecerse. De tal modo, a inicios de 2019 fueron creciendo continuamente los flujos de personas centroamericanas que buscaban viajar por México, ya sea en caravanas o por su cuenta, después de tramitar la TVRH en el sur del país y de otras nacionalidades, como se documenta para el caso de Ciudad Juárez.

A pesar de las medidas de contención tomadas por el Gobierno federal en el sur del país, algunas caravanas alcanzaron a reunir a más de siete mil personas, de acuerdo con los medios de comunicación (Arroyo *et al.*, 2019). El hecho de que se desplazaran en grandes contingentes y que sólo aceptaran alojarse todos juntos representó un reto mayúsculo para los Gobiernos y para la sociedad civil en materia de atención humanitaria.

Las caravanas de 2018 hicieron escala en el centro de varias localidades a lo largo de su camino. Algunos municipios pequeños y pobres del sur del país instalaban lonas en la plaza principal o en una cancha deportiva; numerosos habitantes de esas localidades acudían para proveer comida y agua a los migrantes.

Algunas ciudades acondicionaron grandes instalaciones, en particular, Ciudad de México abrió las instalaciones de la Ciudad Deportiva, en la colonia Magdalena Mixhuca, y durante varias semanas alojó y proveyó de servicios a miles de personas migrantes que llegaron a lo largo del último trimestre de 2018 y el primero de 2019. Otras ciudades y localidades aceptaron alojar a las caravanas, pero sólo durante uno o dos días, como fue el caso de Guadalajara. Algunos gobernadores pagaron autobuses para transportar a los migrantes fuera de su estado y liberarse así, rápidamente, de lo que parecían considerar como un problema sociopolítico. Sin embargo, estas medidas locales o estatales, lejos de ayudar a una planeación, llevaron a las caravanas hasta la frontera norte de México, donde literalmente *toparon con pared*. Las políticas de contención migratoria y la restricción de las políticas de asilo en Estados Unidos significaron en los hechos que miles de personas se quedaran bloqueadas en las ciudades del norte mexicano durante semanas o meses.

En el caso de las ciudades de la frontera norte de México, los estudios presentados en este libro ponen de manifiesto políticas de atención muy diferenciadas, así como actitudes y discursos políticos contrastantes. Mientras que los primeros integrantes de las caravanas que llegaron a Tijuana se encontraron con una situación caótica, en la cual no existió coordinación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para recibir y atender a las personas migrantes, en el caso de Piedras Negras, Coahuila, los tres niveles de gobierno coadyuvaron para canalizar a la caravana hacia un espacio cerrado, totalmente controlado e impedir que los migrantes interfirieran en la vida cotidiana de la sociedad local.

El Gobierno municipal de Tijuana tardó días en proporcionar un espacio común de alojamiento en la Unidad Deportiva Benito Juárez. Estas instalaciones, como explica Pérez en el capítulo «Acciones gubernamentales y no gubernamentales de atención a la caravana», fueron totalmente insuficientes para recibir a más de

seis mil integrantes de las caravanas. Las condiciones climáticas adversas, la falta de servicios sanitarios y el hacinamiento provocaron una situación cada vez más precaria para las personas ahí alojadas y llevaron a acciones desesperadas, tales como una marcha para intentar forzar la entrada a Estados Unidos.

En cambio, en el caso de Piedras Negras, el Gobierno municipal solicitó con dos días de anticipación el acondicionamiento de una nave industrial. Con eficacia y rapidez, este espacio fue habilitado con todos los servicios y con la presencia de varias instituciones en su interior. En el capítulo titulado «Atención humanitaria a la fuerza: Gobernanza de la caravana migrante centroamericana en Piedras Negras, Coahuila», Bruce y Rosales muestran cómo la experiencia de Piedras Negras fue, de alguna manera, una instrumentación de lo que el Gobierno mexicano entendía por «una migración regular, segura y ordenada», en referencia al papel protagónico de México en el Pacto Mundial firmado en Marrakech, Marruecos, en diciembre de 2018. Afirman, sin embargo, que este experimento repercutió en un fuerte control coercitivo de la población para impedir que se integraran a la sociedad local o que intentaran cruzar la frontera. Como narran los autores, cuando algunas de las personas alojadas y controladas en las instalaciones de Piedras Negras se rebelaron por el fuerte control policiaco y militar, las autoridades contrataron autobuses para dispersarlas a lo largo de la frontera y terminaron, así, con su propio experimento.

En su capítulo «Proteger y contener. Estrategias de atención a población solicitante de asilo en Ciudad Juárez», Peña muestra cómo ha ido prevaleciendo la contención migratoria sobre la atención humanitaria a las personas solicitantes de asilo y de qué manera las prácticas de seguridad han llevado a la construcción de una estructura binacional que limita la agencia de las personas en movilidad. Igual que señalan Bruce y Rosales en el caso de Piedras Negras, Peña considera que en Ciudad Juárez la prioridad del Gobierno fue el control disciplinario de la población en movilidad.

De la sociedad civil y religiosa

Los diferentes estudios muestran que la articulación entre Gobierno, asociaciones civiles y organismos internacionales se dio bajo dos principios: el control y la atención solidaria de las personas en movilidad en un contexto de gobernanza global de las migraciones (ver capítulo de Bruce y Rosales), pero con expresiones locales importantes de considerar.

Al contrastar la participación de la sociedad civil y religiosa en las tres ciudades de estudio, es posible confirmar la hipótesis desarrollada a lo largo del volumen sobre el papel que tuvo la visibilización que hicieron los medios y voceros gubernamentales de las caravanas para modelar la reacción del mismo Gobierno federal y local frente a las presiones, por un lado, de Estados Unidos, en el marco de las relaciones asimétricas entre ambos países, y por otro, de la observación de organismos internacionales y locales de derechos humanos. En Tijuana y Piedras Negras, donde llegaron las caravanas de centroamericanos, los Gobiernos municipales, estatales y federal tuvieron un protagonismo sin precedentes, la sociedad civil cooperó, pero no se hizo cargo. En tanto, en Ciudad Juárez, donde en el mismo período se registró un número mayor de desplazados (casi dos o tres veces más), el modelo de intervención siguió el estilo tradicional de administración y control del flujo a través de su canalización hacia los albergues de las distintas ciudades, otorgando apoyos económicos y logísticos puntuales.

En Baja California, como muestra Pérez en «Acciones gubernamentales y no gubernamentales de atención a la caravana», se establecieron mesas de coordinación entre las diferentes instancias y niveles de gobierno y la sociedad civil local, mientras que entre las instancias de Gobierno se dio la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, en términos de canalización, sobre todo de familias que decidieron no hospedarse en los grandes albergues que instaló primero el Gobierno municipal y luego el federal. Aunque en este volumen no se retoma, la participación dentro de

los albergues de organismos internacionales de Gobierno y de la sociedad civil global fue muy importante en el terreno de salud, alimentación, asesoría legal y recreación (El Colef, 2018).

En el caso de Piedras Negras (ver «Atención humanitaria a la fuerza: Gobernanza de la caravana migrante centroamericana en Piedras Negras, Coahuila»), la participación de la sociedad civil y religiosa local fue aún menor. El sector privado y social que participó con la atención humanitaria en el albergue instalado por el Gobierno del estado de Coahuila, fue de tipo internacional, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Cruz Roja Internacional, Médicos Sin fronteras y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). La gestión que realizó el Gobierno de Coahuila tendió a controlar la movilidad a través de tres estrategias: impedir la salida del albergue, lo cual los invisibilizó localmente, documentarlos por medio de la emisión de TVRH y fragmentar la caravana, distribuyéndolos en diferentes puntos fronterizos. Según Bruce y Rosales, la ayuda humanitaria estuvo condicionada por la contención y el control, lo que limitó la acción de la sociedad civil y religiosa, quienes desde la segunda mitad del siglo XX han atendido a los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos.

Como muestra Peña en sus capítulos, la situación fue otra en Ciudad Juárez, donde se recibió un flujo de desplazados en cantidades mayores y de orígenes nacionales diferentes en el mismo período de tiempo: personas caribeñas y mexicanas (desplazadas por violencia y deportadas), además de centroamericanas. Estas personas llegaron en grupos y en grandes cantidades, pero no en caravanas, algunas de ellas se apostaron en puentes y pasajes públicos. En esta ciudad, la sociedad civil y religiosa participó en dos líneas de atención. Por primera vez, la Casa del Migrante asumió temporalmente el control de la lista de citas para solicitar asilo en Estados Unidos. Después de asumir que la ciudad estaba frente a una crisis sin precedentes que rebasaba la capacidad institucional,

la Casa del Migrante entregó las listas al Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes.

La otra línea de participación de la sociedad civil y religiosa fue a través del hospedaje y alimentación de las personas desplazadas. Los cinco albergues de la ciudad recibieron personas en cantidad sin precedentes con un apoyo cuestionable por parte del Gobierno del estado. Una muestra fue la renuncia de la Casa del Migrante a recibir apoyo económico por parte del Gobierno estatal, al considerarlo insuficiente para su labor hospitalaria. El cuestionamiento buscó evitar la disminución de la calidad de la atención y dar prioridad a los más vulnerables, como familias con menores de edad, población LGBTTTTI y personas enfermas, lo que implicó que la gran mayoría de personas de origen cubano quedaran fuera, al viajar en grupos de personas solas. Así, otros albergues iniciaron su habilitación, en parte alentados por el Grupo Beta (corporación del INM), para responder a la necesidad de atención de un gran número de personas anotadas en las listas de espera para solicitar asilo. Jesús Javier Peña Muñoz documenta cómo, además de la diversidad nacional de las personas hospedadas en los albergues, fue el incremento del tiempo de estancia, debido a los procesos de asilo, lo que implicó una movilización de voluntariado y donaciones y de servicios antes no ofrecidos, como fue el de asesoría legal. De tal forma que el cambio de la política de asilo en Estados Unidos y de la aceptación tácita por parte del Gobierno de programas como el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés)¹ impactó en las prácticas humanitarias en los sistemas de albergues y abrió retos para la atención de miles de personas y familias en espera prolongada en ciudades fronterizas.

¹ Mediante este programa, que se inició en enero de 2019, las autoridades de Estados Unidos devuelven a personas de terceros países a México para que esperen ahí durante todo su proceso legal que tiene lugar en alguna corte de ese país. Los días en que tienen cita en la corte, las personas deben presentarse en la frontera para ser conducidas por la autoridad estadounidense.

La reacción de los Gobiernos y la participación de la sociedad civil y religiosa en las tres ciudades lleva a reflexionar sobre la politización de las movildades, no sólo de parte del Gobierno de Estados Unidos, sino también por parte de México. El fuerte desbalance entre la intervención del Gobierno mexicano en la atención en las ciudades estudiadas deja claro que la contención vía documentación y atención en albergues de Gobierno fue selectiva y estuvo dirigida a las caravanas centroamericanas.

Finalmente, las regiones fronterizas siguen siendo un territorio estratégico de control estatal y a la vez de refugio para miles de personas que viajan en búsqueda de una mejor vida o simplemente para no morir. En medio de la complejidad y turbulencia de las movildades humanas contemporáneas, las fronteras geopolíticas son escenarios privilegiados para pensar los retos de conceptualización y de intervención ante las múltiples movildades humanas.

Referencias

- Arroyo, E., Cano, B., París, D., Ruíz, R., Palacios A. y Mariscal, J. (2019). *Cronología. Caravana Centroamericana 2018. 5 de octubre de 2018 al 30 de enero de 2019* [infográfico]. Recuperado de <https://observatoriocolef.org/infograficos/cronologia-de-la-caravana-centroamericana>
- Bermúdez, A. (30 de julio de 2019). Tercer país seguro: cómo el pacto entre Estados Unidos y Guatemala perjudica a los migrantes de Honduras y El Salvador. *BBC News Mundo*. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49173143>
- Coutin, S. B. (2011). Falling Outside: Excavating the History of Central American Asylum Seekers. *Law and Social Inquiry*, 36(3), 569-596.
- Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (2019). *Hoja Informativa: Acuerdos del DHS con Guatemala, Honduras y El Salvador*. Recuperado de <https://www.dhs.gov/sites/default/>

files/publications/19_1007_fact-sheet-spanish-agreements-w-northern-region-central-am-countries.pdf

El Colegio de la Frontera Norte (El Colef). (13 de diciembre de 2018). *La caravana de migrantes centroamericanos en Tijuana 2018. Diagnóstico y propuestas de acción* [reporte]. Recuperado de <https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/la-caravana-de-migrantes-centroamericanos-en-tijuana-2018-diagnostico-y-propuestas-de-accion>

El Colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Secretaría de Desarrollo Social. (2019). *Emif Norte 2017. Migrantes devueltos por las autoridades migratorias de Estados Unidos* [archivo de Excel]. Recuperado de https://www.colef.mx/emif/datasets/tabulados/norte/2017/DEV_Tabulados_2017.xlsx

Nájar, A. (8 de julio de 2019). El «silencio sepulcral» de Honduras y Guatemala ante el cambio de la política migratoria de México y Estados Unidos. *BBC News Mundo*. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48903888>

París, M. D. (2017). *Violencias y migraciones centroamericanas en México*. Tijuana, México: El Colef.

Selee, A. (14 de enero de 2020). Un año de cambios profundos en la política migratoria entre Centroamérica, México y Estados Unidos. Madrid: Fundación Carolina. Recuperado de <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/01/AC-2.20.pdf>

U. S. Customs and Border Protection (CBP). (2019). *Southwest Border Migration FY 2019* [datos estadísticos]. Recuperado de <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration/fy-2019>

U. S. Department of Justice. (2020). *Workload and Adjudications Statistics*. Recuperado de <https://www.justice.gov/eoir/workload-and-adjudication-statistics>